RESOLUCIÓN: 28 (VEINTIOCHO)

---Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) -----

--- **V I S T O** para resolver el toca 32/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el actor ***** *****, contra la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente 1121/2018, relativo al Juicio sobre Reducción de Pensión Alimenticia, promovido contra ***** ***** y ***** *****, ante el Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia, del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; visto el escrito de expresión de agravios, la sentencia impugnada, con cuanto más consta en autos y debió verse; y,-----

RESULTANDO

---**PRIMERO.** La sentencia impugnada en apelación, concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

*“--- PRIMERO.- La parte actora no probó convenientemente su acción, ya que su demanda resultó oscura e imprecisa, y en tanto las demandadas ***** de apellidos ***** , fueron rebeldes.*

*--- SEGUNDO.- Se declara IMPROCEDENTE el presente juicio Ordinario Civil sobre Reducción de la pensión alimenticia decretada dentro del expediente número 01045/2005, del índice de este propio Juzgado, relativo al juicio de Divorcio Voluntario promovido por los CC. ***** y ***** , decretada a favor de los en aquel entonces menores hijos ***** de apellidos ***** , consistente en el 40% (CUARENTA POR CIENTO) sobre el salario y las demás prestaciones que percibe el actor como trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos.*

--- TERCERO.- No se hace condena al pago de costas judiciales en términos del artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas.

--- CUARTO.- Notifíquese Personalmente...”

---**SEGUNDO.** Notificada que fue la sentencia de primer grado a las partes, inconforme el actor ***** interpuso recurso de apelación. Dicho recurso fue legalmente admitido por el juez, quien remitió los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para la substanciación de la impugnación. Por acuerdo plenario de dos de febrero del año que transcurre fue turnado el expediente a esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar. Se radicó el toca el día siguiente, habiéndose tenido al apelante expresando en tiempo y forma los motivos de inconformidad que estima le causa la resolución impugnada. La representación social adscrita a la Sala desahogó la vista correspondiente; habiendo quedado los autos en estado de fallarse; y, -----

-----**CONSIDERANDO**-----

---**PRIMERO.** Esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es competente para resolver el presente recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. -----

---**SEGUNDO.** El apelante ***** , al interponer la apelación, como agravios textualmente manifestó:

“A G R A V I O S:

PRIMER AGRAVIO

FUENTE DEL AGRAVIO: Considerando Cuarto de la Sentencia de fecha 31 de Enero del 2020, dictado en el presente juicio, y que en la parte relativa y a la letra expresa: (Lo transcribe).

DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Se violan en mi perjuicio lo dispuesto por el artículo 252 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; así como el principio de legalidad jurídica y debido proceso contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna; TODOS POR SU FALTA DE APLICACIÓN.

CONCEPTOS DE AGRAVIO: Me causa este agravio el CONSIDERANDO CUARTO de la Sentencia de fecha 31 de Enero del 2020, pronunciada por el (sic) A QUO dentro del Juicio Principal, en el que sostiene que de mis prestaciones de mi escrito inicial de demanda no se puede apreciar mi pretensión y en virtud de ello, mi demanda carece de claridad, resultando improcedentes las prestaciones que se reclaman a la parte demandada, lo cual es totalmente ilógico, incongruente, infundado y violatorio de las reglas esenciales y especiales del procedimiento, pues, precisamente esa observación que la autoridad inferior ahora argumenta para declarar improcedente las prestaciones que contiene mi escrito inicial de demanda, en forma obligatoria debió realizarla en el análisis que se supone efectuó para decidir si admitía o no mi demanda, ello según lo dispuesto por el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado en su fracción III establece: "Si el Juez encontrare que la demanda fuere oscura e irregular, debe, por una sola vez, prevenir al actor que la aclarare, corrija o complete, señalándole en forma concreta el defecto o irregularidad que encuentre" Que como podrá apreciar Su Señoría SITUACIÓN QUE NO OCURRIÓ.

"SI ENCONTRARE QUE ESTÁ ARREGLADA A DERECHO, LA ADMITIRÁ" El Juez en acuerdo de fecha 01 de Octubre del 2018 tiene al C. ***** promoviendo JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA...se admite a trámite dicha promoción. El único requerimiento que hizo su Señoría en el auto que admite a trámite la demanda fue el de señalar el domicilio particular del C. ***** POR LO QUE RESULTA INCONGRUENTE QUE UN AÑO Y CUATRO MESES DESPUES DE ENCONTRAR LA DEMANDA APEGADA A DERECHO Y ADMITIR A TRÁMITE EL PRESENTE JUICIO, DESPUES DE HABER ORDENADO OFICIOS DE INVESTIGACIÓN, ORDENAR PUBLICACIÓN POR EDICTOS, DECLARAR LA REBELDÍA DE LAS DEMANDADAS, ABRIR EL PERIODO PROBATORIO Y ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS Y AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA DIGA QUE LA DEMANDA ES OSCURA E IMPRECISA.

DEMANDA, OBSCURIDAD DE LA, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). (La transcribe)

Y en esta medida, al no constituir una excepción dilatoria, entonces el Juez de la causa le esta vedado señalar que se encontraba impedido para abordar el fondo de la cuestión planteada, máxime si se toma en

cuenta que la relatoría de la demanda no adolece de la imprecisión que señala el Juzgador, en tanto que, de la lectura íntegra de la misma se advierte con claridad las prestaciones que reclama al demandado y los hechos en que funda su pretensión.

Por otro lado, debe precisarse que la interpretación de la demanda debe ser integral a fin de que el Juzgador organice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que encuentra justificación al ser un perito en derecho con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular y orientar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor, tomando en cuenta que la demanda como tal constituye un todo unitario de quede analizarse en su integridad.

De ésa suerte, se pone de manifiesto lo entendible de los agravios, ya que el libelo actio debe analizarse en forma integral conjuntamente con los documentos aportados, la obligación del actor de expresar los hechos de la acción, se cumple cuando éste hace remisión expresa y detallada a los documentos fundatorios exhibidos en ella, puesto que el estudio de la contienda no se circunscribe tan sólo al escrito de demanda, sino también a los documentos acompañados a ella, pues el estudio que haga el juzgador debe ser integral y comprender los documentos anexos a la misma, y en el caso concreto el actor exhibió a su demanda los documentos que dan sustento a su reclamo.

De modo que, la interpretación de la demanda, debe ser íntegra a fin de que el Juzgador organice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, con el fin de orientar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento del su autor, ya que constituye un todo unitario que debe analizarse en su integridad y encausarlo a las hipótesis normativas aplicables al caso, todo ello con apego al principio que dice: "las parte alegan los hechos y el Juez aplica el derecho", de ahí que, el recurso citado debió haberse interpretado en la forma señalada, tal como lo establece la siguientes Jurisprudencias.

DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. (La transcribe).

DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. (La transcribe).

DEMANDA EN EL JUICIO DE ORIGEN, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (La transcribe).

Bajo el contexto anterior, se obtiene que basta que una pretensión sea invocada en la demanda, para que el Juzgador procesa al análisis integral del escrito que la contiene, y la encause a la hipótesis normativa que corresponda, para que, una vez hecho lo anterior se resuelva lo que en derecho proceda, análisis que comprende no sólo a los hechos que la contienen, sino además con los documentos aportados o exhibidos conjuntamente a ella, con el fin de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio, de manera que, el simple hecho de que determinado acto no figure en el capítulo respectivo, ello no quiere decir que debe desestimarse y que por consiguiente no pueda atenderse en el fallo.

Luego de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda, ponen de manifiesto que adverso a lo afirmado por el Juez en el fallo impugnado derivado de la causa de pedir del actor principal, no existe la pretendida oscuridad en la demanda como en forma inexacta lo considera el Juez, el actor cumple con su deber de narrar sucintamente los hechos en que funda su pretensión en términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles, lo anterior es así, si se toma en cuenta que al redactarlos, hizo remisión expresa y detallada a situaciones, datos y circunstancias contenidos en los documentos anexos a ella, y como tal, cumplió con el normativo aludido que consiste en expresar los hechos que dan sustento a su reclamo.

En efecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, acoge el principio de que los litigantes sólo están obligados a exponer y probar los hechos en que apoyen sus pretensiones, o bien, sus excepciones y defensas, y el Juez corresponde aplicar el derecho, de modo que la acción procede en Juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se exprese con claridad cuál es la causa que se exige del reo, circunstancia que se cumple a cabalidad, corrobora lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA). (La transcribe).

SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS. (La transcribe).

EXCEPCION DILATORIA. NO LO ES LA OBSCURIDAD O DEFECTO EN LA DEMANDA. SI EL JUEZ ADMITE UNA DEMANDA IRREGULAR DEBE APELARSE DICHO PROVEIDO. (La transcribe).

*Del estudio integral del escrito inicial se desprende que el C. *****
***** narró en forma clara y precisa los hechos relativos a su causa de pedir, y especificó NOMBRE Y EDAD DE LAS DEMANDADAS Y EN VIRTUD DE ELLO, LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ALIMENTOS YA NO TENÍA RAZÓN DE SER Y QUE SE HABÍA EXTINGUIDO LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ALIMENTOS. Concluyendo sus hechos de demanda CON EL MOTIVO QUE ORIGINÓ LA DEMANDA. En tales condiciones, deviene que en este caso no se cumple con la oscuridad que plantea el Juez, porque a fin de que esta procesa, resulta necesario que la demanda se redacte de tal forma que sea imposible entender ANTE QUIEN SE DEMANDA, PORQUE SE DEMANDA Y SUS FUNDAMENTOS LEGALES, esto es, cuando de sus términos no es posible advertir que es lo pedido por el Actor, ni la causa en que se apoya, ya que ello IMPEDIRÍA a la parte demandada conocer las pretensiones del actor o lo hechos en que se funda. Lo cual como ya se dijo NO SUCEDIÓ en la especie, tan es así, que el Juez la admitió a trámite y se llevó a cabo todo el proceso.*

DEMANDA. LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA SON UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL JUEZ NATURAL DEBE ANALIZAR DE OFICIO, PREVIO AL ESTUDIO DE FONDO, MÁXIME CUANDO SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (La transcribe)...“

---**TERCERO.** Un segmento de dichos agravios, expresados por el actor del juicio de reducción de pensión alimenticia, analizados a través de la causa de pedir, resultan fundados.-----

--- En tales motivos de inconformidad, el apelante alega que indebidamente la juez declaró improcedente el juicio con sustento en que la demanda era oscura e imprecisa, pero que si la juzgadora hubiera analizado los hechos de la demanda y los anexos correspondientes de manera integral, advertiría claramente lo pretendido, es decir, refiere el disidente, el código procesal civil

acoge el principio de que los litigantes solo están obligados a exponer los hechos y probarlos al grado de que la acción procede aunque no se exprese el nombre, y por su parte al juez corresponde aplicar el derecho; y que por ello, no debió declararse improcedente el juicio en base la demanda es oscura e imprecisa.-----

--- Ahora bien, previo a la calificación de los motivos de inconformidad que anteceden, se estima necesario apuntar que la a quo declaró improcedente el juicio de reducción de pensión alimenticia promovido por el aquí apelante, habiendo razonado para ello que la demanda es oscura e imprecisa dado que el actor solicitó la reducción de la pensión alimenticia del 40 % al 15 %, pero no señaló si lo que pretende es la cancelación del porcentaje que de dicha pensión corresponde a sus hijas acreedoras (demandadas) ahora mayores de edad ***** , de apellidos ***** , ya que no pidió la cancelación de dicho porcentaje ni explicó por qué la pensión del 40 % debe reducirse al 15 %, pues ni siquiera mencionó el actor a favor de quién debe aplicarse el citado descuento del 15 %, es decir, en la demanda no se narró la existencia de un tercer acreedor respecto de la pensión del 40 %, lo que se magnifica al haber señalado en el punto petitorio Cuarto de la demanda que se gire oficio a la paraestatal PEMEX en el sentido de que se le descuenta el 25 % en lugar del 40 % que actualmente proporciona por concepto de pensión alimenticia.-----

--- Como se adelantó, resulta fundado el agravio que ha quedado sintetizado. -----

--- Así se considera, porque de conformidad con la demanda, los hechos fundatorios de la acción, y los documentos anexos al escrito inicial (fojas 1 a la 24), interpretados de manera integral, la Sala

advierte que si bien la parte actora ***** expresó que ejerce la acción de reducción de la pensión alimenticia que otorga a sus hijos ahora mayores de edad ***** , de apellidos ***** , también es verdad que en los Hechos 1.-, 3.-, 4.-, y 5.-, señaló lo siguiente: Que dicha pensión del 40% deriva de la sentencia dictada en el juicio de divorcio voluntario, de la que acompañó copia certificada; que pide ser relevado de la obligación alimenticia respecto de sus hijas ***** , de apellidos ***** , dado que ambas no solo son ya mayores de edad pues cuentan con 22 y 20 años de edad, respectivamente, sino que además la primera terminó sus estudios de administración y actualmente labora, y la segunda vive en ***** con ***** con quien ha procreado 2 menores hijas, de nombre ***** , de apellidos ***** , habiendo anexado el accionante las documentales correspondientes a las actas de nacimiento donde consta la mayoría de edad de sus hijas, así como las actas de nacimiento de sus dos menores nietas, y las documentales relativas al número de seguridad social de sus hijas demandadas ***** y *****; y, que por todo ello resulta lógico que se ha extinguido el derecho alimenticio de sus 2 hijas mayores de edad demandadas. Además, del anexo relativo a la sentencia de divorcio, se desprende que fue dictada el 8 de febrero de 2006 por el Juez Cuarto Familiar de Altamira, Tamaulipas, de la que se destaca no solo la disolución del vínculo matrimonial que unía al actor con su ex cónyuge ***** , sino también que dicho actor deberá proporcionar el 40% de su salario y demás prestaciones en favor de sus hijos ***** , de apellidos

***** . También debe decirse que el hecho de que en el punto petitorio Cuarto de la demanda el actor haya solicitado se cancelara el 25 por ciento de la pensión que proporciona por el 40 por ciento, se explica en razón de que pidió que subsistiera por el 15 por ciento, lo que interpretado de manera integral implica que éste porcentaje sería para el menor acreedor Aurelio ***** .-----

--- Así las cosas, se reitera, analizando los hechos de la demanda y los documentos anexados a la misma, de manera integral, puede concluirse que lo efectivamente planteado por el promovente del juicio es, que respecto de la pensión alimenticia del 40% para sus tres hijos que a su cargo se estableció en la sentencia de divorcio, pide la cancelación del porcentaje que corresponde a sus hijas demandadas *****, de apellidos *****, y que quede subsistente únicamente por el 15% en favor de su menor hijo acreedor ***** .-----

--- Sustenta el ejercicio considerativo que antecede, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 181982, que dice:

“DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 229, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, establecen el imperativo de que en la demanda se expresen con claridad y precisión los hechos en que se sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal obligación se cumple cuando el actor hace remisión expresa y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos exhibidos junto con la demanda, aun

cuando éstos constituyan base de la acción, pues con esa remisión, aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la parte demandada tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas para desvirtuarlos.

Contradicción de tesis 26/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 12 de noviembre de 2003. Mayoría de 3 votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Tesis de jurisprudencia 63/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de doce de noviembre de dos mil tres.”

Así como la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil, Registro: 187249, Novena Época, que señala:

“DEMANDA EN EL JUICIO DE ORIGEN, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. No por la circunstancia de que una prestación no figure en el capítulo de prestaciones reclamadas de la demanda, sino en el de hechos, ello quiere decir que el juzgador deba desestimarla, pues la demanda puede y debe ser interpretada en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, de ahí que basta la sola mención y naturaleza de dicha prestación, aunque sea en el capítulo de hechos, para que el órgano jurisdiccional decida sobre la misma, sin que por lo anterior pueda estimarse que se deja en estado de indefensión al demandado, pues al producir la contestación al escrito de demanda tiene que referirse a los hechos, confesándolos o negándolos y expresando los que ignore por no ser propios, y con mayor razón puede, desde ese momento, negar la procedencia de las prestaciones reclamadas, dado el amplio conocimiento que tiene de la misma en su integridad.”

--- También la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, Registro 178475, que establece:

“DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de

que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella; pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende además el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio.”

Y la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro 171800, que indica:

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de demanda, ocurno, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.”

--- Por ende, una vez que fue analizada de manera integral la demanda y los anexos, debe concluirse en que lo peticionado por el actor reúne los requisitos mínimos para su debido trámite judicial en los términos que han quedado apuntados, es decir, que la acción intentada es la de cancelación alimenticia del porcentaje correspondiente de la pensión que proporciona a sus hijas demandadas y que subsista por el 15% en favor de su menor hijo acreedor *****; de ahí lo fundado del agravio a estudio expresado en tal sentido. -----

--- Ahora bien, como en el trámite de la apelación no existe el reenvío, en plenitud de jurisdicción la Sala deberá resolver lo conducente. -----

--- Al respecto, como ya lo consideró el juez de primer grado en la sentencia apelada, las pruebas del actor se relacionan y valoran de la siguiente manera:

1). DOCUMENTALES. Visibles a fojas 4 a la 24 del expediente principal, consistentes en un recibo de pago de nómina expedido por Petróleos Mexicanos a favor del trabajador *****; Certificados de las Actas de Nacimiento de las demandadas ***** y *****; impresiones electrónicas de constancias de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de ***** y *****; y de certificados de actas de nacimiento de las menores *****; y *****; y, Legajo de copias certificadas del expediente número 1045/2005, relativo al juicio de Divorcio Voluntario promovido por los CC. ***** y *****; tramitado ante el propio Juzgado de origen; documentales que merecen

valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 392, 397 y 398 del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, y eficacia para acreditar el parentesco existente entre el actor ***** y las demandadas ***** y ***** , los cuales son padre e hijas, respectivamente, que éstas últimas son mayores de edad, que ***** es madre de dos hijas menores de edad de nombre ***** , y ***** ., que ambas demandadas se encuentran dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y asimismo la existencia de la pensión alimenticia del 40% que otorga el actor en favor tanto de las dos demandadas como del diverso hijo menor acreedor ***** , la que fue decretada en la sentencia de divorcio voluntario del actor con su ex cónyuge ***** .

2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que le favorezca de los hechos y materia que de este juicio se deriven. A la que se concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 392 y 411 del Código Procesal Civil en consulta.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistentes en todas y cada una de las actuaciones judiciales practicadas en juicio y que favorezcan a sus intereses. A la que se concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 392, 397 y 398 del Código Procesal Civil.
3. Por su parte, las demandadas, ***** y ***** GALINDO VALDEZ, no ofrecieron caudal probatorio alguno, destacándose que fueron emplazadas por

edictos y fueron declaradas rebeldes por su falta de contestación a la demanda.

--- El caudal probatorio ofrecido por la parte actora, se considera suficiente y apto en términos del artículo 295 fracción II del código civil, para acreditar la acción de cancelación alimenticia del porcentaje de la pensión que perciben las demandadas ***** , de apellidos ***** , en su carácter de acreedoras alimentistas. Así se considera, porque se encuentra demostrado no solo que ambas demandadas son mayores de edad al contar con 25 y 22 años de edad, respectivamente, sino también que gozan de seguridad social proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que la segunda es madre de dos menores de nombre ***. e I.C. de apellidos **** procreadas con ***** . Por ende, se considera que debe suspenderse o extinguirse la obligación alimentaria del actor respecto de sus hijas mayores de edad demandadas.-----

--- Así las cosas, y toda vez que el porcentaje alimenticio del 40 por ciento de la pensión que otorga el demandante comprende también al diverso menor acreedor alimentista ***** ***** , debe analizarse lo conducente para resolver el monto de la pensión de éste, pues el accionante pidió en la demanda que subsista por el 15 por ciento.-----

--- Al respecto, debe destacarse que la pensión alimenticia de la especie (40 por ciento), otorgada a favor de tres acreedores (las demandadas ***** , de apellidos ***** , así como del menor de edad ***** ***** , fue establecida mediante sentencia firme de 8 de febrero de 2006 dictada dentro del diverso juicio de Divorcio 1045/2005 del índice del propio juzgado de

los autos, con cargo al padre ***** (actor en el juicio de cancelación alimenticia de origen), por el equivalente al 40 por ciento que éste percibe en su empleo en Petróleos Mexicanos, y al no existir constancia en contrario, se entiende que se decretó por partes iguales a favor de los citados tres acreedores, es decir, en forma divisible y mancomunada.-----

--- Para corroborar tal aserto, se acude a la clasificación de las obligaciones respecto a la existencia de una obligación con sujeto plural cuando hay dos o más deudores y dos o más acreedores; un solo deudor y dos o más acreedores; y dos o más deudores y un solo acreedor.-----

--- Así, a partir de la existencia de la pluralidad de sujetos que puede presentarse en el cumplimiento de una obligación, surgen los criterios clasificatorios de obligaciones en divisibles o indivisibles y se determinan por la naturaleza de la prestación, en tanto que las obligaciones solidarias o mancomunadas, por la forma de obligarse; por tanto, la regulación de las clasificaciones mencionadas queda sujeta a lo que dispone el Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Entonces, en cuanto a la forma de obligarse, las obligaciones pueden ser mancomunadas o solidarias.-----

--- La ley presume que existe mancomunidad cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores respecto de una misma obligación, y en esas circunstancias, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros, como en el caso a estudio, en el entendido de que las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario.-----

--- Por su parte, la solidaridad activa se actualiza cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación y la solidaridad pasiva, cuando dos o más deudores reportan la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida; por lo que a diferencia de la mancomunidad, la solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las partes.-----

--- En cuanto a la divisibilidad de la obligación, la distinción se genera de acuerdo con la naturaleza, múltiplos (número de deudores y/o acreedores) y con eventuales pactos de indivisibilidad y entonces se dice que las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente y son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero.-----

--- A partir de lo anterior puede afirmarse que, cuando el deudor o el acreedor es un sujeto plural, la clasificación de la obligación siempre es doble; primero, en cuanto a la determinación de su divisibilidad o indivisibilidad, y en segundo orden, en cuanto a la solidaridad o mancomunidad según se hayan obligado las partes; de ahí que, en materia de obligaciones de sujeto plural existen cuatro combinaciones posibles; obligaciones divisibles y mancomunadas; obligaciones divisibles y solidarias; obligaciones indivisibles y mancomunadas; y obligaciones indivisibles y solidarias.-----

--- Bajo los criterios apuntados puede afirmarse que, por regla general, la obligación alimentaria es divisible, por la naturaleza de la prestación que, generalmente, se traduce en la entrega de una suma de dinero, ya sea establecida en una cantidad cierta y específica o en un porcentaje de los ingresos del deudor.-----

--- Ahora, cuando esa obligación consiste en la entrega de un porcentaje de los ingresos del deudor, para hacer el pago a varios acreedores alimentistas, en modo alguno significa que este no sea susceptible de fraccionarse pues es evidente que, numéricamente, cualquier cantidad puede ser dividida en "n" número de partes.-----

--- Al respecto, no se soslaya el criterio que ha emitido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, para fijar el monto de la pensión alimenticia no es dable atender a un criterio estrictamente matemático, como sería dividir los ingresos del deudor entre el número de acreedores alimentistas pues, en efecto, ese ejercicio de cálculo no es válido para establecer a cuánto ascenderá la pensión, en cuyo caso el juzgador debe atender al principio de proporcionalidad.-----

--- Sin embargo, en el específico supuesto que ahora se analiza, se parte de la base de que el monto de la pensión ya fue fijado por el juzgador mediante sentencia dictada en un juicio previo sobre alimentos definitivos, sobre un porcentaje de los ingresos del deudor, es decir, al disponer la cancelación para dos alimentistas y la subsistencia para otro, el juez primario ya no se está en el momento de fijar la pensión, por tanto, tampoco estaba en condiciones de aplicar el principio de proporcionalidad inmerso en el artículo 288 del Código Civil; por lo que no es aplicable el criterio jurisprudencial del que se ha hecho mérito.-----

--- Por otro lado, en lo que se refiere a que si el pago de alimentos se trata de una obligación mancomunada o solidaria, ha de atenderse a lo que prevé la ley respecto de ese tipo de obligaciones, particularmente lo atinente a que la comunidad se presume y la

solidaridad deriva de la ley o del acuerdo de voluntades de las partes.-----

--- En el caso, no existe alguna disposición de la ley que prevea la solidaridad en la obligación de proporcionar o recibir alimentos, por ende, debe atenderse a la presunción de que se trata de una obligación mancomunada; además, dada la naturaleza de los alimentos (recíprocos, intransferibles e irrenunciables), ni su cumplimiento ni su exigencia pueden quedar a cargo de una sola persona cuando hay pluralidad de sujetos para su cumplimiento o para su ejercicio, ya que se trata de los recursos necesarios para la subsistencia del acreedor alimentista, por lo que no sería válido el pacto que acordara la solidaridad entre estos.-----

--- Así lo resolvió la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis sin número, visible en el Semanario Judicial y su gaceta, en la página 20, Volumen 55, Cuarta Parte, con el rubro y contenido que dicen:

“ALIMENTOS. MANCOMUNIDAD DE ACREEDORES. Entre los acreedores alimentarios no hay solidaridad, sino simple mancomunidad. Por lo que, si la madre demandó, en representación de su menor hijo, el pago de la pensión alimenticia fijada para ambos en el convenio de divorcio voluntario, y nada reclamó para sí por haber contraído nuevo matrimonio, debe considerarse dividido el crédito en tantas partes como acreedores hay, y deducir de la pensión la parte proporcional que a ella le correspondía.”

Así como en la diversa tesis sin número, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, en la página 1725, Tomo CXXII, de rubro y texto siguientes:

“ALIMENTOS, CALIDAD DE LA OBLIGACIÓN DE DARLOS. La obligación de dar alimentos no es solidaria, sino mancomunada, es decir, que no puede exigirse a uno solo de los obligados, a darlos por el total del crédito, y por tanto, es violatoria de garantías la sentencia que asigne a uno solo la carga

de la pensión, con derecho a repetir en contra de los demás deudores alimentistas.”

--- Entonces, debe concluirse que la obligación de pago de alimentos cuando esta es fijada en un porcentaje de los ingresos del deudor alimentario y en su cumplimiento existe pluralidad de sujetos acreedores como en el presente caso, es una obligación divisible y mancomunada.-----

--- En congruencia con lo anterior, si la pensión que otorgaba el deudor alimentista para tres acreedores se estableció por el 40 por ciento, y si como quedó considerado en ésta resolución debe cancelarse la de dos acreedores (demandadas en el juicio de origen), entonces el porcentaje alimenticio cancelado comprende dos terceras partes del 40 por ciento, entendiéndose consecuentemente que debe subsistir la pensión del menor hijo ***** por una tercera parte cuyo porcentaje significa el 13.33 por ciento.-----

--- Sin embargo, en virtud no solo de tutelar el principio del interés superior del menor consagrado, entre otros dispositivos legales, en los artículos 4 Constitucional y 1 del código procesal civil, sino también por el hecho de que así lo demandó ***** en su carácter de actor y deudor alimentista, la pensión del citado menor acreedor deberá subsistir por el equivalente al 15 por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que el obligado alimentario percibe en su empleo en la paraestatal Petróleos Mexicanos; porcentaje que le favorece porque representa 1.67 más del porcentaje establecido a su favor.-----

--- En los anteriores términos, debe declararse procedente el juicio de cancelación alimenticia propalado por el aquí apelante; sin que sea el

caso de estudiar excepción o defensa alguna, pues las demandadas no produjeron contestación a la demanda ni ofrecieron pruebas.-----

--- Cabe agregar, que la cancelación de la pensión alimenticia de la especie no afecta al menor acreedor, ya que al no existir constancia en contrario, se entiende que el porcentaje alimenticio de origen (40 por ciento) se decretó a favor de los entonces tres acreedores por partes iguales.-----

Lo anterior, encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 48/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, materia civil, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 335, de contenido siguiente:

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE DEMANDA LA CESACIÓN O DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA SOLAMENTE RESPECTO DE ALGUNO O ALGUNOS ACREEDORES ALIMENTARIOS, PORQUE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS ES DIVISIBLE Y MANCOMUNADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y COAHUILA). De los artículos 1917 a 1938 del Código Civil para el Estado de Veracruz y 2577 a 2609 del Código Civil para el Estado de Coahuila, que prevén la clasificación de las obligaciones cuando hay pluralidad de sujetos, en mancomunadas y solidarias, y en divisibles e indivisibles, se obtiene que la obligación de pago de alimentos es divisible y mancomunada en virtud de su naturaleza que, por regla general, se traduce en la entrega de una suma de dinero, ya sea establecida en una cantidad determinada o en un porcentaje de los ingresos del deudor. Así, cuando la obligación consiste en la entrega de un porcentaje de los ingresos del deudor a varios alimentistas, tal exigencia es divisible porque siempre es susceptible de fraccionarse; y es mancomunada, por la presunción que se genera a partir de la propia ley y porque no existe disposición legal en el sentido de que la obligación de proporcionar o de recibir alimentos sea solidaria. En ese sentido, tomando en cuenta que el litisconsorcio es necesario cuando en la relación sustantiva ventilada en el juicio, varias personas se encuentran vinculadas inescindiblemente por la

misma causa y, por tanto, es indispensable llamar a todos los interesados para decidir en una sola sentencia su situación jurídica respecto de dicha causa, se concluye que esa figura procesal no se actualiza cuando se demanda la cesación o la disminución de la pensión alimenticia solamente respecto de alguno o algunos alimentistas, pues entre éstos existe un crédito divisible y mancomunado que hace posible que los derechos que cada uno ostenta se resuelvan por separado, con la salvedad de que el juzgador reserve o no emita decisión sobre los derechos de los acreedores que no fueron llamados.”.

--- Finalmente, no se formula especial condena en el tema de los gastos y costas judiciales, toda vez que aunque el actor obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones, sin embargo, las demandadas no produjeron contestación a la demanda y fueron declaradas rebeldes.-----

--- Bajo las consideraciones que anteceden, ante lo fundado de los agravios expresados por el apelante, y una vez que la Sala reasumió jurisdicción, con apoyo en el artículo 926 del código de procedimientos civiles, lo que procede es revocar la sentencia apelada, declarándose la procedencia del juicio. -----

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

---PRIMERO. Los agravios expresados por el actor *****
 contra la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente 1121/2018, relativo al Juicio sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido contra *****
 ***** y *****
 ante el Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia, del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; un segmento de ellos resultó fundado, lo que condujo a la Sala a reasumir jurisdicción y resolver lo conducente.

---**SEGUNDO.** Se revoca la sentencia apelada, para que ahora sus puntos resolutive digan así:

“--- PRIMERO.- La parte actora ***** probó convenientemente su acción de cancelación de pensión alimenticia, y por su parte las demandadas ***** de apellidos ***** no produjeron contestación a la demanda, por lo que fueron declaradas rebeldes.

--- SEGUNDO.- Se declara PROCEDENTE el juicio sobre Cancelación de pensión alimenticia que percibían las demandadas ***** de apellidos ***** y que había sido decretada dentro del diverso expediente número 01045/2005, del índice de este propio Juzgado, relativo al juicio de Divorcio Voluntario promovido por ***** y ***** que había sido establecida divisible y mancomunadamente a favor de las en aquel entonces menores hijas ***** de apellidos ***** así como del aún hijo menor acreedor ***** por el equivalente al 40% (CUARENTA POR CIENTO) sobre el salario y las demás prestaciones que percibe el actor ***** como trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos.

--- TERCERO.- Queda subsistente únicamente una pensión alimenticia a favor del menor de edad ***** por el equivalente al 15% (QUINCE POR CIENTO) sobre el salario y las demás prestaciones que percibe el actor ***** como trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos.

--- CUARTO.- Gírese el oficio correspondiente a la referida fuente laboral, para el efecto de que se sirva cumplimentar lo ordenado en los resolutive que anteceden.

--- QUINTO.- No se hace condena al pago de costas judiciales.

--- Notifíquese personalmente...”

---**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.** Con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.-----

--- Así lo resolvió esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por unanimidad de votos de los **Magistrados Alejandro Alberto Salinas Martínez y Jesús Miguel Gracia Riestra** en términos del artículo 27 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, siendo Presidente y

ponente el primero de los nombrados, quienes firman con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Lic. Alejandro Alberto Salinas Martínez
Magistrado Presidente y ponente

Lic. Jesús Miguel Gracia Riestra
Magistrado

Lic. Sandra Araceli Elías Domínguez
Secretaria de Acuerdos

Enseguida se publica en lista de acuerdos. CONSTE.
L'AASM/L'JMGR/L'SAED/CICC

El Licenciado(a) CLAUDIA ISELA CARDENAS CAMERO, Secretario Projectista, adscrito a la SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución (28) VEINTIOCHO dictada el (JUEVES, 18 DE FEBRERO DE 2021) por el MAGISTRADO ALEJANDRO ALBERTO SALINAS MARTÍNEZ, constante de (23) VEINTITRÉS fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: (el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y sus demás datos generales, y seguir el listado de datos suprimidos) información que se considera legalmente como (confidencial, sensible o reservada) por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en la Tercera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2021 del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 29 de abril de 2021.